LEY N° 12552

Modificando la Ley N° 11049 de Seguridad Interior de la República.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO:

El Congreso ha dado la ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUANA

Ha dado la ley siguiente:

ARTICULO UNICO. — Modifícase la Ley N° 11049 en los términos siguientes:

CAPITULO I

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD PUBLICA

Artículo 1°— Cometén delito contra la Seguridad y Tranquilidad Públicas los que con fines políticos o sociales:

a).—Fomenten o propaguen, por cualquier medio, individualmente, o como miembros de asociaciones, instituciones, grupos o partidos, doctrinas o propósitos que tiendan a alterar o modificar violentamente el orden político o social de la República;

b).—Se asocian a doctrinas de carácter y tendencia internacionales, declaradas como tales por la Ley, y los que propaguen esas doctrinas;

c).—Reciban subvención o mantengan relaciones con personas, instituciones, partidos políticos o gobiernos extranjeros, con el fin de propagar doctrinas de carácter y tendencia inter-

nacional, contrarias al régimen democrático, o de alterar violentamente el orden público o social de la República;

d).—Lleven o transporten armas o explosivos, sin permiso de la autoridad competente;

e).—Importen, fabriquen o manden fabricar o importar, adquieran, distribuyan, conserven o comercien armas de fuego, cortantes o contundentes, municiones, explosivos o bombas; o sustancias para su fabricación, sin el permiso correspondiente;

f).—Formulen o planteen en nombre de las asociaciones, sindicatos o instituciones que representen, peticiones extrañas a sus fines institucionales propios, con propósitos de alterar el orden público;

g).—Intenten producir, produzcan, estimulen o mantengan huelgas, con violación de las disposiciones legales que las rigen o provoquen estados de agitación en sindicatos o centros de trabajo o de enseñanza con el propósito de ocasionar la ruina de una industria o de alterar el orden público, presionar o intimidar a la autoridad;

h).—Traten de persuadir o persuadan a las autoridades políticas, miembros de los Institutos Armados, de Policía y del Cuerpo de Investigaciones y Vigilancia, a faltar a sus superiores o a sus deberes en general;

i).—Los que siendo funcionarios públicos llamados a cuidar del orden y de la estabilidad de las instituciones nacionales, permitan por negligencia, alteraciones del orden público;

j).—Exploten sin el permiso correspondiente, bombardas, cohetones,

petardos o cualquiera otra materia explosiva, destinados a alterar o a dar señales para alterar el orden público;

k).—Hagan propaganda política en dependencias del Estado, centros de trabajo, cuarteles, colegios y centros de enseñanza en general, o desmoralicen o perturben la mente de sus dependientes o educandos, sembrando ideas disociadoras o promoviendo sentimientos de odio y de rebeldía al orden y a la autoridad. Será circunstancia agravante de este delito incurrir en él, abusando del ejercicio de la función;

l).—Hagan propaganda en favor de partidos políticos declarados fuera de la ley y los que, por este medio, injurien o difamen a la autoridad u ofendan la respetabilidad de las instituciones públicas;

m).—Efectúen, sin permiso de la autoridad, manifestaciones públicas; y,

n).—Los que internen en la República impresos o gráficos destinados a la propaganda de teorías sectarias, comunistas o disociadoras o que inciten a cualesquiera de los delitos previstos en la presente ley.

Artículo 2º—Los culpables de las infracciones previstas en los incisos a) al j), inclusive, del artículo anterior, sufrirán, según la gravedad del delito, las penas de expatriación de uno a cinco años, reclusión militar o prisión. A los culpables de los delitos previstos en los incisos k) al n) del mismo artículo se les aplicará la pena de multa de un mil soles oro a diez mil soles oro. En caso de insolvencia del penado o de su negativa al pago de la multa, les será sustituida por prisión a razón de un mes por cada un mil soles oro de multa o fracción de un mil soles oro.

CAPITULO II

DELITOS CONTRA LA ORGANIZACION Y PAZ INTERNA DE LA REPUBLICA

Artículo 3º— Cometén delito contra la Organización y Paz Interna de la República:

a).—Los que, con el fin de alterar el orden público, sustituir al Gobierno, o causar intimidación, atenten contra la vida del Presidente de la República, Ministros de Estado, miembros de los Institutos Armados, funcionarios públicos, miembros de las Fuerzas de Policía y Cuerpo de Investigaciones o contra la vida de sus cónyuges e hijos;

b).—Los que asalten en domicilio o en cualquier lugar público o privado a una o varias personas, y causen, o pretendan causarles, la muerte, lesiones graves, con fines políticos y sociales; y los que hagan uso en el mismo caso, de explosivos, armas o elementos de destrucción;

c).—Los que incurran en cualesquiera de las infracciones de rebelión, sedición o motín, previstos en los Títulos I al IV, Sección Cuarta del Libro Segundo del Código de Justicia Militar y Título II, Sección Décima, del Código Penal, sean militares o civiles;

d).—Los que inciten a destruir o inutilizar o destruyan o inutilicen, interrumpen o se apoderen, total o parcialmente, de cualquier servicio público, agua, cables, telégrafos, teléfonos y radio, con el propósito de subvertir, variar o sustituir al Gobierno o causar intimidación;

e).—Los que incurran en cualesquiera de los delitos contra la libertad

individual, violación de domicilio, extorsión, usurpación, daños, usurpación de autoridad, violación y resistencia a las autoridades, previstos en los artículos 222, 223, 230, 249, 257, 259, 320, 321 y 322 del Código Penal, cuando se perpetren con el fin u ocasión de subvertir, variar o sustituir al Gobierno o causar intimidación; y

f).—Los que realicen cualquier acto terrorista en forma no prevista en las disposiciones anteriores.

Artículo 4º— Se impondrá pena de muerte a los autores de los delitos previstos en los incisos a) y b) del artículo anterior. A los cabecillas de los delitos previstos en el inciso e) se les impondrá la pena de muerte.

La pena será de penitenciaría o prisión para los que, sin ser cabecillas de la rebelión, sedición o motín, hayan prestado voluntariamente y a sabiendas su cooperación. Se aplicarán las mismas penas de penitenciaría o prisión a los culpables de los delitos previstos en los incisos d), e) y f) del mismo artículo 3º.

CAPITULO III

APLICACION DE LAS PENAS

Artículo 5º—La calidad de autor o de cómplice de los delitos que comprende esta ley, se determinará conforme a lo dispuesto en los artículos 100, 101, 103 y 104 del Código Penal.

Artículo 6º—La pena será fijada en la sentencia de acuerdo con los principios que establece el artículo 50 del Código Penal.

Artículo 7º—Los delitos que comprende esta ley tendrán la misma pena

ya se trate de delito consumado o de delito frustrado, la que no estará sujeta a reducción o modificación alguna por tener el acusado menos de 21 años pero más de 18. Si tuviere el acusado de 16 a 18 años, se descenderá a la pena inmediata inferior y se cumplirá la condena en secciones especiales de los establecimientos penales.

Artículo 8º—Los cómplices serán penados, según los casos, o con la pena mínima que corresponde a los autores o con la pena inmediata inferior a aquella que se imponga a los autores.

Artículo 9º—Para la resolución de las cuestiones de hecho, así como para condenar o absolver, bastará mayoría de votos. Cuando hubiere disconformidad entre los tres miembros del Tribunal, respecto de la pena, se volverá a discutir y votar los puntos en que se haya disentido. Si en esta segunda votación continúa la disconformidad, el voto en que se imponga pena más grave, se agregará al que le siga con gravedad inmediatamente inferior, haciéndose esta agregación de mayor a menor para reunir dos votos conformes.

Para imponer la pena de muerte se requiere la unanimidad de votos, y en caso de no haberla, se aplicará la pena de internamiento.

Artículo 10º—Los Jueces y Tribunales encargados del juzgamiento de los delitos previstos en la presente ley, declararán en la sentencia, al mismo tiempo que la responsabilidad penal, la responsabilidad civil correspondiente.

CAPITULO IV

ORGANISMOS JUDICIALES

Artículo 11º—En caso de que sean militares los responsables de las infrac-

ciones previstas por esta ley, serán sancionados con las penas que ella establece, pero el procedimiento se seguirá de acuerdo con las pertinentes disposiciones del Código de Justicia Militar. De igual modo se procederá cuando las infracciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 3º hayan sido cometidas por civiles.

El conocimiento de las demás infracciones previstas en esta ley que sean cometidas por civiles corresponde a la justicia penal ordinaria.

CAPITULO V

PROCEDIMIENTO

Artículo 12º—La tramitación de los procesos que deben seguirse ante la justicia penal ordinaria, se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto por el Código de Procedimientos Penales y con las modificaciones que contiene la presente ley, que sólo rigen para los delitos contemplados por la misma.

Artículo 13º—En los procesos que se siga por virtud de esta ley, no se admitirán excepciones ni artículos previos, salvo las de prescripción, amnistía o cosa juzgada.

Los términos en la instrucción y en el juicio oral son improrrogables, salvo los casos específicamente permitidos por esta ley.

Artículo 14º— En los procedimientos judiciales por delitos previstos en esta ley no procede la libertad provisional ni la condena y liberación condicionales.

Artículo 15º—La instrucción por las infracciones materia de esta ley debe terminarse en un plazo máximo de cin-

co días, bajo responsabilidad de quienes hayan intervenido en ella.

Cumplido este plazo se elevará indefectiblemente la instrucción al Tribunal Correccional en el estado en que se halle, con el dictamen del Agente Fiscal y el informe del Juez Instructor.

Antes de elevarse la instrucción al Tribunal, se pondrá ésta a disposición de los interesados en el Despacho del Juez, por veinticuatro horas.

Artículo 16º—Recibida la instrucción por el Presidente del Tribunal Correccional, la remitirá al Fiscal con todos los antecedentes que existen en Secretaría para que se pronuncie sobre ella en el término de veinticuatro horas.

Artículo 17º— Si el Fiscal pide la ampliación de la instrucción por estimarla incompleta o defectuosa, el Tribunal lo acordará, señalando al mismo tiempo un plazo perentorio que no podrá exceder de tres días.

El Fiscal precisará en su dictamen las diligencias omitidas o que deban rehacerse o completarse.

Artículo 18º— Dentro de las veinticuatro horas de recibido el escrito de acusación Fiscal, el Tribunal resolverá la fecha y hora de la audiencia, debiendo señalarse el día más próximo posible y en ningún caso después del tercero.

Artículo 19º— Si no concurriera el defensor del acusado, las audiencias se realizarán, o continuarán, en el caso de estar ya iniciadas, con el defensor de oficio.

Artículo 20º— En caso de interponerse recurso de nulidad contra la sentencia, el proceso será elevado inmediatamente a la Corte Suprema, cuyo

Fiscal deberá emitir su dictamen dentro de las veinticuatro horas y debiendo el Tribunal ver y resolver la causa dentro de un término no mayor de tres días después de recibido este dictamen.

Artículo 21°— El recurso de nulidad no impide que se ejecute la sentencia expedida por el Tribunal, salvo los casos previstos por los artículos 330° y 331° del Código de Procedimientos Penales. Si se impone la pena de muerte, la sentencia sólo podrá cumplirse cuando quede ejecutoriada, en cuyo caso se ejecutará en la forma que prescribe el Código de Justicia Militar.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 22°— Para todo lo que no está previsto en la presente ley respecto a la aplicación judicial de la pena y procedimientos, se observará lo dispuesto por el Código de Procedimientos Penales.

Artículo 23°— Cuando los responsables por delito que esta ley castiga, sean extranjeros nacionalizados, se les cancelará, sin perjuicio de las penas que les corresponda, la carta de naturalización y, cumplida la condena, serán expulsados del territorio nacional como extranjeros perniciosos.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 24°— Para los fines que persigue esta ley y por la conveniencia de prevenir la consumación de los delitos de que se trata, queda facultado el Ministerio de Gobierno y Policía para adoptar las disposiciones preventivas que crea necesarias, a fin de garantizar la tranquilidad política y social y

la organización y paz interna de la República; debiendo poner a cualquier detenido a disposición del Juez competente dentro de las veinticuatro horas.

Artículo 25°— Los que actualmente se encuentren detenidos por haberse comprobado sus actividades delictuosas contrarias al orden social, serán puestos a disposición de los respectivos Jueces para los efectos pertinentes.

Artículo 26°— Deróganse las leyes y disposiciones en cuanto se opongan a la presente ley.

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Casa del Congreso, en Lima, a los diecisiete días del mes de enero de mil novecientos cincuentiséis.

HECTOR BOZA, Presidente del Senado.

EDUARDO MIRANDA SOUSA, Presidente de la Cámara de Diputados.

E. FONTCUBERTA, Senador Secretario.

F. CARRION MATOS, Diputado Secretario.

Al Señor Presidente Constitucional de la República.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho días del mes de enero de mil novecientos cincuentiséis.

MANUEL A. ODRÍA.

A. VILLACORTA.